

El financiamiento de la enseñanza

Se invierte más en educación, pero la desigualdad persiste

Las provincias aportan recursos dispares

Por Raquel San Martín
De la Redacción de La Nación

Quando se habla de políticas públicas, los números pueden contar sólo verdades a medias. Aunque la inversión que hace el gobierno nacional en educación viene creciendo sostenidamente en los últimos años, las desigualdades entre las provincias —y la consecuente calidad dispar de lo que sucede en las aulas— se mantiene y se profundiza en el país.

Así, la provincia de Buenos Aires es la que más invierte, con el 34,3% de su gasto público dedicado a educación, pero su inversión anual por alumno está en el noveno puesto, con \$ 2783. Corrientes, con la segunda inversión del país (casi 30% de su gasto), está en el puesto 21° en inversión por alumno.

En el otro extremo, Santa Cruz le dedica el 11,2% a educación, pero eso representa \$ 4202 por año por alumno, en el cuarto puesto del país. En términos generales, la inversión anual por alumno varía entre \$ 7171 en Tierra del Fuego a \$ 1497 en Salta.

La coparticipación federal, que beneficia a algunas provincias y perjudica a otras notoriamente, y la ausencia de mecanismos que premien a las provincias que en educación invierten más o compensen a las que pueden hacerlo menos, desdibuja la efectividad de un financiamiento sostenido que no ter-

recursos para educación”, dijo a LA NACIÓN Axel Rivas, director del área de Educación de Cipepec, aunque insistió en advertir: “Las desigualdades en el financiamiento provincial no logran ser modificadas y siguen siendo muy pronunciadas”.

Quando se mira en detalle, se advierte que Corrientes, Buenos Aires, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y San Luis no cumplieron con las metas de financiamiento previstas en 2007. Paradójicamente, no siempre sucede porque invirtieran poco, sino porque los recursos que reciben por coparticipación federal son desiguales.

Sin premios ni apoyo

La ley intentó paliar estas diferencias con un programa de compensación salarial —que este año distribuyó algo más de \$ 561 millones—, que destina recursos a 11 provincias para que puedan cumplir con el piso salarial dispuesto para los docentes de todo el país. Pero, según Rivas, su efectividad fue parcial, en buena medida porque “no logra compensar de manera más objetiva ni incluir a provincias que no están siendo consideradas, como la de Buenos Aires”.

Tampoco hay mecanismos para premiar a los que más esfuerzos hacen. “La ley no establece mecanismos para redistribuir los esfuerzos de cada provincia para financiar la educación. Todas tienen que crecer en porcentaje sin importar cuál fue su punto de partida.” Así, para cumplir con las metas que establece la ley, Buenos Aires debería llegar en 2010 a destinar el 40% de su gasto público a educación —un objetivo casi inalcanzable—, mientras Santa Cruz estaría cumpliendo las metas si sólo invirtiera el 12%.

Según el informe, los salarios aumentaron un 23% en términos reales desde la sanción de la ley. Sin embargo, esto no ha disminuido el nivel de los conflictos docentes. Más aún, el informe detecta que no existe relación entre la cantidad de paros y el crecimiento de los salarios.

Por ejemplo, Entre Ríos fue la tercera provincia que aumentó su salario docente entre 2006 y 2007, y hasta septiembre contabilizaba 13 días de paro. Tierra del Fuego, con el segundo salario alto del país, tuvo 16 paros. También hay situaciones en el polo opuesto. Las cinco provincias que menos esfuerzo presupuestario por la educación realizan tuvieron en conjunto sólo cinco días de paro en el año.

“No hay relación entre la cantidad de paros y la situación objetiva de las provincias, lo que se vincula con nuestra cultura política. Somos incapaces de construir espacios institucionales para la resolución de conflictos”, señaló Rivas.

Hacia el futuro, el informe ofrece un panorama que invita a estar alerta. Los cambios en la situación económica mundial y una mayor presión fiscal hacen pensar que para las provincias será progresivamente más complicado cumplir con las metas que establece la ley, mientras deben lidiar además, con las presiones sindicales.

En promedio, el 94% del gasto provincial para educación se utiliza en salarios, lo que deja las inversiones en escuelas, cargos docentes o equipamiento lejos de los planes de la mayoría.

“No hay relación entre la cantidad de paros y la situación objetiva de las provincias. Somos incapaces de construir espacios institucionales para resolver los conflictos”

mina de impactar en las aulas.

Esas son las conclusiones principales a las que llegó el Informe anual del monitoreo de la ley de financiamiento educativo, que por segundo año consecutivo realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cipepec), y que se presentó ayer.

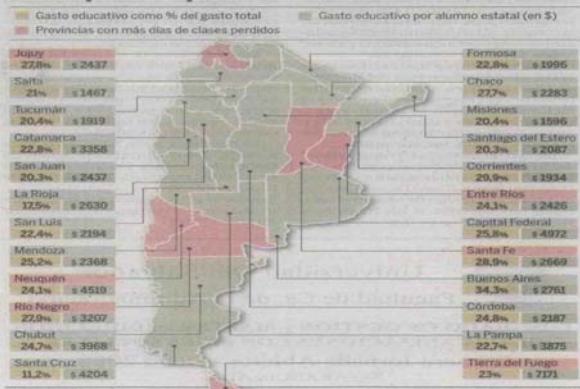
Metas e inversiones

Sancionada en diciembre de 2005, la ley establece que el gobierno nacional y las provincias deberán aumentar progresivamente la inversión en educación hasta alcanzar en 2010 a un 6% en el producto bruto interno (PBI).

A casi tres años de su entrada en vigor, la ley se ha cumplido: en 2007, la Nación y las provincias destinaron un 5,4% del PBI a educación y así sobrecumplieron la meta que indicaba llegar al 5% en ese año. También las provincias han aumentado su esfuerzo financiero en general: su gasto total destinado a educación pasó de un promedio del 32,6% en 2005 a un 23,8% en 2007. Así, según el informe, la inversión educativa pasó de \$ 24.399 millones en 2005 a \$ 32.919 millones en 2006 y \$ 43.796 millones en 2007.

“Destacamos el cumplimiento global de la ley, porque efectivamente se están garantizando muchos más

Presupuesto para la educación



Fuente: Cipepec.

LA NACIÓN